

RESOLUCIÓN 97(24)

**Sobre los veinte principios directores para la lucha contra la corrupción**  
*(adoptados por el Comité de Ministros el 6 de noviembre de 1997 en la sesión 101 del Comité de Ministros)*

El Comité de Ministros,

Considerando la Declaración adoptada durante la Segunda Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, que tuvo lugar en Estrasburgo el 10 y 11 de octubre de 1997, y conforme al Plan de Acción establecido en esta ocasión, en particular la sección III, párrafo 2 “Lucha contra la corrupción y el crimen organizado”;

Consciente del hecho de que la corrupción representa una grave amenaza para los principios y los valores fundamentales del Consejo de Europa, debilita la confianza de los ciudadanos en la democracia, erosiona la supremacía de la ley, desprecia los derechos del hombre y pone en peligro el progreso social y económico;

Convencidos de que la lucha contra la corrupción necesita un carácter multidisciplinar, y dentro de esta perspectiva, teniendo en cuenta el Programa de acción del Consejo de Europa contra la corrupción, así como las resoluciones adoptadas por los Ministros europeos de justicia durante sus 19<sup>a</sup> y 20<sup>a</sup> Conferencias, celebradas en Valeta y Praga respectivamente;

Habiendo recibido el borrador de los veinte principios directores para la lucha contra la corrupción, elaborado por el Grupo Multidisciplinar sobre la Corrupción (GMC);

Firmemente decididos a unir los esfuerzos de nuestros países para combatir la corrupción,

**ACORDAMOS ADOPTAR LOS 20 PRINCIPIOS DIRECTORES PARA LA LUCHA  
CONTRA LA CORRUPCIÓN, ENUMERADOS A CONTINUACIÓN:**

1. tomar las medidas efectivas para prevenir la corrupción y, dentro de esta perspectiva, sensibilizar a la opinión pública y promover comportamientos éticos;
2. asegurar la incriminación coordinada de la corrupción nacional e internacional;
3. asegurar que las personas encargadas de la prevención, la investigación, la persecución y la sanción de las infracciones de corrupción cumplan con la autonomía y la independencia necesarias para el ejercicio de sus funciones, que sean libres de toda influencia incompatible con

su estatus y que dispongan de los medios adecuados para la obtención de pruebas; y también asegurar la protección de las personas que ayudan a las autoridades a luchar contra la corrupción y salvaguardar el secreto de la instrucción;

4. tomar las medidas apropiadas para llevar a cabo el embargo y la confiscación de los productos de la corrupción;
5. tomar las medidas apropiadas para evitar que las personas morales sirvan de pantalla para disimular la comisión de infracciones de corrupción;
6. preocuparse por limitar toda inmunidad ante las investigaciones, las persecuciones y las sanciones relativas a las infracciones de corrupción, lo que es necesario en una sociedad democrática;
7. favorecer la especialización de personas u organismos encargados de luchar contra la corrupción y otorgarles los medios y la formación necesarios para el ejercicio de sus funciones;
8. asegurar que la legislación fiscal y las autoridades encargadas de su puesta en marcha contribuyen a la lucha contra la corrupción de forma eficaz y coordinada; en particular, que no otorgan, en el derecho o en la práctica, la deducción fiscal de las comisiones ocultas o de otros gastos ligados a infracciones de corrupción;
9. velar por que esta organización, el funcionamiento y los procesos de decisión de las administraciones públicas tengan en cuenta la necesidad de luchar contra la corrupción; en particular, por que garanticen un grado de transparencia compatible con la eficacia de sus acciones;
10. asegurar que las reglas relativas a los derechos y los deberes de los agentes públicos tengan en cuenta las exigencias de la lucha contra la corrupción y prevean medidas disciplinarias apropiadas y eficaces; favoreciendo la elaboración de instrumentos apropiados, como los códigos de conducta, que precisan el comportamiento esperado por los agentes públicos;
11. asegurar que las actividades de las administraciones públicas y del sector público estén sometidas a los procedimientos apropiados de verificación de cuentas;
12. señalar la importancia del papel que los procedimientos de verificación de cuentas pueden jugar en la prevención y la detección de la corrupción fuera de las administraciones públicas;
13. asegurar que el sistema de responsabilidad de las administraciones públicas tiene en cuenta las consecuencias de los actos de corrupción cometidos por los agentes públicos;
14. adoptar los procedimientos relativos a los mercados públicos de una transparencia adecuada para favorecer una competencia leal y disuadir a los corruptos;
15. fomentar la adopción de códigos de conducta por parte de los representantes elegidos y favorecer unas reglas sobre la financiación de partidos políticos y de campañas electorales que desalienten la corrupción;

16. garantizar a los medios de comunicación la libertad de recibir o de comunicar informaciones concernientes a asuntos de corrupción, bajo reserva únicamente de los límites necesarios en una sociedad democrática;
17. asegurar que los derechos civiles tienen en cuenta la necesidad de luchar contra la corrupción y que se prevean, en concreto, recursos eficaces para aquellos cuyos derechos e intereses estén afectados por ésta;
18. fomentar la investigación sobre corrupción;
19. asegurarse de que, dentro de todos los aspectos de la lucha contra la corrupción, los vínculos eventuales con la criminalidad organizada y el blanqueo de dinero sean tomados en consideración;
20. desarrollar la cooperación internacional lo máximo posible dentro de todos los ámbitos de la lucha contra la corrupción.

Y, A FIN DE PROMOVER UN PROCESO DINÁMICO PARA PREVENIR Y COMBATIR AFICAZMENTE LA CORRUPCIÓN, EL COMITÉ DE MINISTROS:

1. pide a las autoridades nacionales aplicar estos Principios dentro de la legislación y dentro de la práctica de sus países;
2. encarga al Grupo Multidisciplinar sobre la Corrupción concluir rápidamente la elaboración de instrumentos jurídicos internacionales, dentro de la ejecución del Programa de acción contra la corrupción;
3. encarga al Grupo Multidisciplinar sobre la Corrupción presentar un proyecto sin demora, en el que proponga la implementación de un mecanismo eficaz y apropiado, bajo la égida del Consejo de Europa, encargado de velar por el respeto de estos Principios y la puesta en marcha de los instrumentos jurídicos internacionales a adoptar.

# CONSEIL DE L'EUROPE

## COMITÉ DES MINISTRES

### RÉSOLUTION (97) 24

#### PORANT LES VINGT PRINCIPES DIRECTEURS POUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

*(adoptée par le Comité des Ministres le 6 novembre 1997,  
lors de la 101e session du Comité des Ministres)*

Le Comité des Ministres,

Vu la Déclaration adoptée lors du Deuxième Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement, réuni à Strasbourg les 10 et 11 octobre 1997, et conformément au Plan d'Action établi à cette occasion, en particulier la section III, paragraphe 2 « Lutte contre la corruption et le crime organisé »;

Conscient du fait que la corruption représente une grave menace pour les principes et les valeurs fondamentaux du Conseil de l'Europe, sape la confiance des citoyens en la démocratie, porte atteinte à la prééminence du droit, méconnaît les droits de l'homme et met en péril le progrès social et économique;

Persuadé que la lutte contre la corruption doit revêtir un caractère multidisciplinaire et, dans cette perspective, ayant égard au Programme d'action du Conseil de l'Europe contre la corruption, ainsi qu'aux résolutions adoptées par les Ministres européens de la justice lors de leurs 19e et 21e Conférences qui ont eu lieu à la Valette et à Prague respectivement ;

Saisi du projet des vingt principes directeurs pour la lutte contre la corruption, élaboré par le Groupe Multidisciplinaire sur la Corruption (GMC) ;

Résolu à unir les efforts de nos pays pour combattre la corruption,

#### CONVIENT D'ADOPTER LES VINGT PRINCIPES DIRECTEURS POUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, ENUMERES CI-APRES:

1. prendre des mesures efficaces pour prévenir la corruption et, dans cette perspective, y sensibiliser l'opinion publique et promouvoir des comportements conformes à l'éthique;
2. assurer une incrimination coordonnée de la corruption nationale et internationale;
3. assurer que les personnes chargées de la prévention, des enquêtes, des poursuites et de la sanction des infractions de corruption bénéficient de l'indépendance et de l'autonomie nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, soient libres de toute influence incompatible avec leur statut et disposent de moyens adéquats pour l'obtention de preuves; assurer la protection des personnes qui aident les autorités à lutter contre la corruption et sauvegarder le secret de l'instruction;
4. prendre des mesures appropriées en vue de la saisie et de la confiscation des produits de la corruption;
5. prendre des mesures appropriées en vue d'éviter que des personnes morales ne servent d'écran pour dissimuler la commission d'infractions de corruption;
6. veiller à limiter toute immunité à l'égard des enquêtes, des poursuites et des sanctions relatives aux infractions de corruption à ce qui est nécessaire dans une société démocratique;

7. favoriser la spécialisation de personnes ou organismes chargés de la lutte contre la corruption et leur accorder les moyens et la formation nécessaires à l'exercice de leurs fonctions;
8. assurer que la législation fiscale et les autorités chargées de sa mise en œuvre contribuent à la lutte contre la corruption de façon efficace et coordonnée, en particulier en n'accordant pas, en droit ou en pratique, la déductibilité fiscale des commissions occultes ou des autres frais liés aux infractions de corruption;
9. veiller à ce que l'organisation, le fonctionnement et les processus décisionnels des administrations publiques tiennent compte de la nécessité de lutter contre la corruption, en particulier en assurant un degré de transparence compatible avec l'efficacité de leur action;
10. assurer que les règles relatives aux droits et devoirs des agents publics tiennent compte des exigences de la lutte contre la corruption et prévoient des mesures disciplinaires appropriées et efficaces; favoriser l'élaboration d'instruments appropriés, tels que des codes de conduite, qui précisent d'avantage le comportement attendu des agents publics;
11. assurer que les activités des administrations publiques et du secteur public soient soumises à des procédures appropriées de vérification des comptes;
12. souligner l'importance du rôle que les procédures de vérification des comptes peuvent jouer dans la prévention et la détection de la corruption en dehors des administrations publiques;
13. assurer que le système de responsabilité des administrations publiques prenne en compte les conséquences des actes de corruption commis par les agents publics;
14. adopter des procédures relatives aux marchés publics d'une transparence adéquate pour favoriser une concurrence loyale et décourager les corrupteurs;
15. encourager l'adoption par les représentants élus de codes de conduite et favoriser des règles sur le financement des partis politiques et des campagnes électorales qui découragent la corruption;
16. garantir aux médias la liberté de recevoir ou de communiquer des informations concernant des affaires de corruption, sous réserve des seules limites nécessaires dans une société démocratique;
17. assurer que leur droit civil tienne compte de la nécessité de lutter contre la corruption et prévoie, en particulier, des recours efficaces pour ceux dont les droits et intérêts sont affectés par celle-ci;
18. encourager la recherche sur la corruption;
19. s'assurer que, dans tous les aspects de la lutte contre la corruption, les liens éventuels avec la criminalité organisée et le blanchiment de l'argent soient pris en considération;
20. développer la coopération internationale la plus large possible dans tous les domaines de la lutte contre la corruption.

ET, EN VUE DE PROMOUVOIR UN PROCESSUS DYNAMIQUE POUR PREVENIR ET COMBATTRE  
EFFICACEMENT LA CORRUPTION,  
LE COMITE DES MINISTRES :

1. demande aux autorités nationales d'appliquer ces Principes dans la législation et dans la pratique de leurs pays;
2. charge le Groupe Multidisciplinaire sur la Corruption de conclure rapidement l'élaboration d'instruments juridiques internationaux, en exécution du Programme d'action contre la corruption;
3. charge le Groupe Multidisciplinaire sur la Corruption de lui soumettre sans délai un projet proposant la mise en place d'un mécanisme approprié et efficace, sous l'égide du Conseil de l'Europe, chargé de veiller au respect de ces Principes et à la mise en œuvre des instruments juridiques internationaux à adopter.